

Voces: ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS ~ DATOS PERSONALES ~ DERECHO A LA INFORMACION ~ DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA ~ FISCALIZACION DE TRIBUTOS ~ HABEAS DATA ~ IMPUESTO INTERNO

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de Salta, Sala II(CFedSalta)(SalaII)

Fecha: 12/09/2024

Partes: Tabes S.A. c. AFIP s/ amparo ley 16.986

Publicado en: La Ley Online

Sumarios:

1. El pedido de información de una empresa sobre la investigación que el organismo fiscal está desarrollando sobre ella queda fuera del alcance de lo que pretende proteger la ley 27.275, que es la publicidad de los actos de gobierno a fin de controlar el desenvolvimiento de la administración, gestión pública y cumplimiento de las funciones encomendadas al gobierno cuando se encuentre comprometido el interés público. Lo pretendido por la firma no refiere a una información pública sino a un asunto que le incumbe exclusivamente a ella, sin que impacte en los intereses generales de la sociedad como el libre debate de ideas, la libertad de expresión, el escrutinio de la prensa sobre asuntos críticos de interés general, la rendición de cuentas, participación social en la toma de decisiones sobre políticas de Estado, el control democrático sobre actos estatales, de gestión de fondos públicos y eficiencia en el uso de los recursos, transparencia en el cumplimiento de las funciones públicas y cumplimiento de procedimiento legales a fin de erradicar y prevenir la corrupción, entre otros.
2. Al pedido de una empresa tendiente a obtener toda la información sobre la fiscalización que está llevando la AFIP sobre ella, no puede otorgársele el carácter de información pública en los términos de la ley 27.275, más aún, cuando el reciente decreto 780/2024 (B.O. 2/9/2024) —modificadorio del decreto 206/17 reglamentario de la reglamentario de la mencionada ley— incorporó como artículo 3° al Anexo I de este último y su modificadorio el siguiente texto: “Las deliberaciones preparatorias y papeles de trabajo, o el examen preliminar de un asunto, no serán considerados documentos de carácter público”.
3. La pretensión de una empresa tendiente a obtener toda la información sobre la fiscalización que está llevando la AFIP sobre ella parecería más bien un pedido de acceso a sus datos personales en los términos de la ley 25.326. Sin embargo, en tal marco no se podría acceder a lo requerido, de conformidad con el inc. 2 del art. 17. La información procesada por la AFIP constituye una excepción al derecho que le asiste a la firma, tal como lo previó el legislador, pues acceder a su pedido sería otorgarle la posibilidad de obstaculizar la actividad fiscalizadora de aquella, por cuanto divulgaría las técnicas o procedimientos de la investigación referida al cumplimiento del impuesto interno, supuesto que constituye un valladar a su pretensión.

Jurisprudencia Relacionada(*)

Corte Suprema

[Corte Suprema de Justicia de la Nación, 07/04/2009, Empresa de Combustible Zona Común S.A. c. Administración Federal de Ingresos Públicos, AR/JUR/4039/2009](#)

(*) Información a la época del fallo

4. El derecho de acceso a la información no es un derecho absoluto sino que puede estar sujeto a limitaciones. Por lo tanto, resulta admisible que el ordenamiento jurídico establezca ciertas restricciones al acceso a la información, las que deben ser verdaderamente excepcionales, perseguir objetivos legítimos y ser necesarias para alcanzar la finalidad perseguida.

5. La AFIP goza de prerrogativas tendientes a verificar y fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias con el objetivo de que todas las personas contribuyan al sostenimiento de los gastos del Estado, por lo que cuenta con amplios poderes para recolectar, almacenar y proceder al tratamiento de información relacionada con sus potestades fiscales, sin que la actora hubiera demostrado de que los datos recabados puedan ser utilizados para finalidades distintas o incompatibles con aquellas que motivaron su recolección.

Texto Completo: Expte. N° FSA 3505/2023/CA1

2ª Instancia.- Salta, septiembre 12 de 2024.

Considerando: 1) Que el recurso fue deducido contra la sentencia del 24/05/2024 por la que se rechazó la acción de amparo promovida por Tabes SA tendiente a que se declare la nulidad de la Resolución N° 2023-4-E E y se intime a la AFIP a entregar la información oportunamente requerida con más sus constancias documentales referida a las órdenes de intervención Nros. 2.067.042 y 2.067.044 y a los Requerimientos Nros. 0150002022048701407, 0150002022048700707, 0150002022058507907, 0150002022059529707, 0150002022075168004 y 01500002022075169004, indicando las causas que motivaron su apertura, la instrucción que derivó en la fiscalización abierta, con todos los antecedentes administrativos y dictámenes jurídicos producidos, mensajes interno, directivas, estudio, informe, oficio, correspondencia oficial, acta e información escrita, fotográfica, grabada, en cualquier tipo de soporte (magnético, digital u otro) asociada tales procedimientos. Impuso las costas a la actora vencida.

Para resolver en tal sentido, la a quo se refirió a los pedidos de información presentados por los apoderados de Tabes SA en sede administrativa el 22/12/2022 respecto de las órdenes de intervención N° 2.607.042 y 2.067.044, que fueran reiterados el 20/01/2023; y realizó una reseña de lo acontecido en el Expte. FSA 18.143/2018 “Tabes SA c. EN-M Hacienda - AFIP-DGI s/ Proceso de Conocimiento” por considerar que se encuentra estrechamente vinculado con el presente amparo, particularmente con la medida cautelar allí ordenada por este Tribunal, a fin de que AFIP suspenda, en relación a la empresa, cualquier acción tendiente al cobro del monto fijo mínimo de tributación establecido en la primera y segunda oración del párrafo segundo del art. 18 de la ley 24.674, y así también con lo solicitado por la actora en aquellas actuaciones el 03/02/2023 para que se le impida a la Administración fiscalizar y verificar las obligaciones tributarias del impuesto interno al tabaco, entendiendo que ello viola la medida cautelar dispuesta.

Seguidamente, analizó las disposiciones de la ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública y las facultades otorgadas a AFIP por la ley 11.683 (arts. 33 a 36).

Afirmó que, en ese marco, el organismo no se encuentra limitado para ejercer sus facultades de verificación y fiscalización respecto de sus obligaciones tributarias y que frente a los pedidos administrativos de suministrar información aquel actuó adecuadamente, denegándolo con fundamento en las excepciones del art. 8 inc. g) de la ley 27.275, por cuanto acceder a lo requerido podría divulgar y/u obstaculizar procedimientos y acciones en curso vinculadas a la investigación sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias; añadiendo que tampoco se respetaría el procedimiento de determinación de oficio establecido por la ley de procedimiento fiscal.

Advirtió que la actora, sin mayor fundamento, intenta anticipar la oportunidad en la que debe ejercer su derecho de defensa, ya que según el art. 17 de la ley 11.683, a los efectos de que el contribuyente presente su descargo, el organismo deberá proporcionar “detallado fundamento” de las actuaciones administrativas y de las impugnaciones o cargos que se formulen, y brindar acceso a la totalidad de las actuaciones administrativas que ha labrado, toda vez que para el cuestionamiento de una determinación impositiva la ley ha previsto —de manera específica— un procedimiento y un órgano de decisión, contando además con las vías recursivas pertinentes.

Señaló que en esa instancia la accionante podrá no solo conocer y solicitar la corrección de los datos referidos a ella, sino también demostrar la improcedencia de la hipotética pretensión fiscal, plantear todas sus defensas e invocar la posible nulidad de las pruebas colectadas en los procedimientos desarrollados.

Luego, en base a los argumentos propiciados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con remisión al dictamen del Procurador General de la Nación, en los autos “Empresa de Combustibles Zona Común SA c. AFIP s/ Habeas Data”, sentencia del 07/04/2009, concluyó que el obrar de la AFIP se ajustó a derecho, pues en cumplimiento a lo dispuesto en el art. 13° de la Ley 27.275, el organismo emitió un acto administrativo, específicamente una resolución denegatoria de brindar la información requerida, el cual se encontraba fundado y motivado en la excepción contenida en el inciso g) del artículo 8° de la ley mencionada, lo que indica estar en presencia de una decisión administrativa que cuenta con la motivación suficiente.

Agregó que la actora no logró aportar elementos que permitan vislumbrar la existencia de un proceder ilegítimo y arbitrario atribuido a la AFIP y que fluya del acto administrativo denegatorio del derecho al acceso a la información.

Para finalizar, en cuanto a lo manifestado por la actora de que el acto sería nulo por ser producto de una actuación del Subdirector en exceso de sus facultades, precisó que el artículo 13 del Anexo I del Decreto N° 206/2017 establece en el último párrafo que “La máxima autoridad podrá delegar la emisión del acto de denegatoria de información en un funcionario cuyo cargo no sea inferior al de Director Nacional o equivalente según el sujeto obligado de que se trate.”; y que la Disposición N° 259 (AFIP) del 25/09/2018, en su artículo 1° delega “...en la Subdirección General de Coordinación Técnico Institucional la facultad de emitir el acto de denegatoria de información solicitada en los términos de la Ley N° 27.275 y su modificatorio, previa intervención del servicio permanente de asesoramiento jurídico”; todo lo cual ha sido cumplido de manera acabada por la Administración.

2) Que el apoderado de la actora, al expresar agravios manifestó que la a quo omitió pronunciarse respecto de la nulidad de la Resolución N° 2023-4-E solicitada en la demanda y que en consecuencia se intime a la accionada a entregar la información oportunamente requerida con más sus constancias documentales.

Expresó que se concluyó en forma arbitraria y sin justificativo alguno que su petición no se condice con el instituto del que se ha intentado valer, circunscribiendo su pedido de información y demanda a la afirmación dogmática de que la AFIP “se encontraba realizando investigaciones tendientes a determinar si la contribuyente había cumplido sus obligaciones tributarias” y haciendo siempre énfasis en las facultades de aquella.

Adujo que la sentencia decide en forma contraria a su derecho, básicamente por considerar que el accionar de la AFIP se circunscribe a la ley de procedimiento tributario.

Arguyó que la a quo, a pesar de haber dedicado todo el considerando X a analizar la Ley de Acceso a la Información Pública, resolvió por fuera del espectro normativo examinado, dejando de lado el principio general de publicidad de la información y determinando la legalidad de la denegación de acceso por parte de la AFIP en base a una excepción —artículo 8 inciso g—, pero sin jamás justificar los motivos por los que la misma sería conducente.

Sostuvo que un pronunciamiento que adolece de deficiencias lógicas en cuanto a su silogismo no puede ser reputado como válido, debiendo revocarse por alejarse de las directrices que fijó en su considerando X.

Agregó que se omitió tener en cuenta los principios de presunción de publicidad, transparencia y máxima divulgación, informalismo, máximo acceso, apertura, máxima premura, alcance limitado de las excepciones, in dubio pro petitor, facilitación y buena fe a los que se refirió, y que el resultado de tal omisión es una resolución que se basa lisa y llanamente en lo alegado por la AFIP y se aparta del derecho aplicable.

Refirió que la sentencia entremezcla la acción impetrada en autos con la iniciada en el expediente CAF N° 18.143/2018 y con los pedidos allí realizados tendientes a impedir lo que su parte considera una violación a la medida cautelar ordenada y concluye equivocadamente que Tabes pretende adelantarse a la oportunidad en la que deberá ejercer su derecho de defensa respecto a un eventual proceso de determinación de información que reclama —producida en forma previa como mensajes o correos internos en poder de la AFIP— no le será hecha conocer, siendo este el único medio idóneo a tal fin.

Expuso que se omitió considerar que la Corte Suprema se ha expedido en cuanto a que la carga de la prueba de la legitimidad de la negativa al acceso a la información pública corresponde al Estado, por lo que erradamente se le impuso a su parte demostrar hechos que se encuentran fuera de su esfera de alcance, siéndole imposible demostrar la ilegalidad en el obrar de la AFIP, quien es la que debe explicar por qué la información requerida se encuentra incurso en el supuesto del art. 8 inc. g), lo que no ha hecho, al igual que la sentencia.

Dijo que no se tuvo en cuenta la jurisprudencia de la Corte Federal citada por su parte, en la que se hace referencia al principio de máxima divulgación por el que toda información debe ser accesible a fin de posibilitar el control democrático por parte de los administrados.

Criticó que se pretenda validar la resolución nula que denegó el acceso a la información

pública por haberse encontrado la AFIP ejerciendo facultades propias de verificación y fiscalización, ya que ello desvirtúa el sentido y propósito de la Ley de Acceso a la Información Pública.

Transcribió los argumentos propiciados por la Corte Federal en el la causa “Washington Álvarez” (Fallos: 335:1417) donde obligó al Fisco a revelar las causas que motivaron inspecciones a contribuyentes.

Añadió que la información denegada tiene como objeto conocer la manera en que se han desempeñado agentes y funcionarios públicos pertenecientes a la AFIP, tal como avaló el Alto Tribunal en el fallo “Cippec”.

Por último, considerando que la demanda debe ser aceptada en todas sus partes, se agravio en forma subsidiaria de la imposición de costas a su mandante.

3) Que corrido el traslado de ley, la apoderada de la AFIP lo contestó el 07/06/2024 indicando que la actora reitera los hechos expuestos en la demanda, los cuales ya fueron contestados por su parte y merituados en la sentencia.

Entendió que la presente causa fue tratada adecuadamente por la jueza, ya que se vincula a los hechos que tramitan bajo el expediente CAF N° 18.143/2018 (particularmente con la medida cautelar) y se relaciona íntegramente con la denegación de acceso por AFIP, en virtud de que el marco investigativo generado en las órdenes de intervención tiene por finalidad controlar el cumplimiento de la ley de impuestos internos y podrían derivar en delitos previstos en la Ley Penal Tributaria, que es lo que fundamenta y configura la excepción alegada por su parte —artículo 8 inciso g) de la Ley 27.275—, relacionándose todo indefectiblemente con las facultades conferidas y procedimientos reglados por la Ley 11.683.

Advirtió que de la lectura de los requerimientos acompañados por la actora se desprende nítidamente la causa que motiva el origen de las órdenes de intervención, esto es “verificar el cumplimiento dado a las leyes de impuestos cuya recaudación está a cargo de esta Administración Federal...” con indicación del impuesto y períodos fiscales. Añadió que también fueron objeto de verificación otros contribuyentes en todo el país.

Expresó que la actora cita en su apoyo fallos anteriores a la sanción de la Ley 27.275, los que versaban sobre hechos evidentemente distintos.

Sostuvo que no puede valorarse el pedido de la accionante de manera aislada a la investigación llevada a cabo por el Organismo, siendo que la propia actora se remite a ella, con lo cual su pedido se traduce en un pedido de “explicaciones” por parte del Fisco del ejercicio de sus facultades legalmente previstas en la Ley 11.683, lo que claramente excede el concepto de transparencia que surge del espíritu de la Ley a la Información Pública.

Precisó que la resolución cuya legalidad cuestiona la actora ha sido dictada respetando los principios constitucionales que rigen la materia, por lo que la pretendida arbitrariedad e ilegalidad que se alega en estos autos no han sido demostradas por la amparista.

Adujo que no basta el mero descontento con la fundamentación brindada por la Administración para habilitar la acción entablada y tachar de arbitrario un acto, como así tampoco puede proceder el amparo so pretexto de encontrarse ejerciendo el derecho de

información en pro de la transparencia de la gestión pública, cuando sobradamente se ha demostrado que la actora está bajo proceso de investigación, encontrándose constantemente obstaculizando el mismo, conforme consta en la causa que tramita bajo el Expte. CAF 18.143/2018.

Expresó que la acción entablada se basa “sólo” en la sospecha de “hostigamiento” teñida de subjetivismo y el descontento respecto a la fundamentación y motivos brindados en la Resolución 2023-4-E-AFIPAFIP, la cual está amparada por la excepción dispuesta por el artículo 8 inciso g) de la Ley 27.275, circunstancia debidamente valorada por el resolutorio impugnado, habiendo tenido en cuenta el marco fáctico legal que encuadra a Tabes SA.

En cuanto al agravio sobre las costas, afirmó que en autos se dan los presupuestos objetivos para que sean impuestas al derrotado, habida cuenta que esa representación, en su oportunidad, las solicitó expresamente, existió sustanciación de la acción, resultando finalmente su parte vencedora en cuanto no se ha hecho lugar a la pretensión incoada.

4) Que en fecha 03/07/2024 dictaminó la Fiscal de feria, propiciando el rechazo del recurso.

5) Que concierne memorar que el derecho de buscar y recibir información ha sido consagrado expresamente por la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (art. IV) y por el art. 13.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

Al respecto, nuestra Corte Federal en Fallos: 335:2393 y 338:1258 recordó que en el caso “Claude Reyes y otros vs. Chile”, del 19/09/2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que “el art. 13 de la Convención, al estipular expresamente los derechos a ‘buscar’ y a ‘recibir’ ‘informaciones’, protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la información bajo el control del Estado, con las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la Convención. Consecuentemente, dicho artículo ampara el derecho de las personas a recibir dicha información y la obligación positiva del Estado de suministrarla, de forma tal que la persona pueda tener acceso a conocer esa información o reciba una respuesta fundamentada cuando por algún motivo permitido por la Convención el Estado pueda limitar el acceso a la misma para el caso concreto. Dicha información debe ser entregada sin necesidad de acreditar un interés directo para su obtención o una afectación personal, salvo en los casos en que se aplique una legítima restricción. Su entrega a una persona puede permitir a su vez que esta circule en la sociedad de manera que pueda conocerla, acceder a ella y valorarla.

(...) En una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación, el cual establece la presunción de que toda información es accesible, sujeto a un sistema restringido de excepciones, pues el actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública, lo que hace posible que las personas que se encuentran bajo su jurisdicción ejerzan el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas. El acceso a la información bajo el control del Estado, que sea de interés público, puede permitir la participación de la gestión pública a través del control social que se puede ejercer con dicho acceso”.

A nivel nacional el derecho de acceso a la información pública se ha regulado mediante ley 27.275 (BO 29/09/2016), en la que se fijaron los principios que rigen la materia (art. 1), las definiciones y los alcances del mencionado derecho (art. 2 y 3), los sujetos obligados (art. 7) y las excepciones al régimen (art. 8).

En lo que aquí interesa, entre los principios señalados por la ley surge el de “Alcance limitado de las excepciones: los límites al derecho de acceso a la información pública deben ser excepcionales, establecidos previamente conforme a lo estipulado en esta ley, y formulados en términos claros y precisos, quedando la responsabilidad de demostrar la validez de cualquier restricción al acceso a la información a cargo del sujeto al que se le requiere la información” (art. 1).

Por su parte, el art. 8 establece que “Los sujetos obligados sólo podrán exceptuarse de proveer la información cuando se configure alguno de los siguientes supuestos: (...) g) Información elaborada por asesores jurídicos o abogados de la administración pública nacional cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adaptarse en la defensa o tramitación de una causa judicial o divulgar las técnicas o procedimientos de investigación de algún delito u otra irregularidad o cuando la información privare a una persona del pleno ejercicio de la garantía del debido proceso; (...). Las excepciones contenidas en el presente artículo no serán aplicables en casos de graves violaciones de derechos humanos, genocidio, crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad”.

A su vez, el art. 13 dispone que “...el sujeto obligado sólo podrá negarse a brindar la información objeto de la solicitud, por acto fundado, si se verificara que la misma no existe y que no está obligado legalmente a producirla o que está incluida dentro de alguna de las excepciones previstas en el artículo 8° de la presente ley. La falta de fundamentación determinará la nulidad del acto denegatorio y obligará a la entrega de la información requerida (...). La denegatoria en cualquiera de los casos dejará habilitadas las vías de reclamo previstas en el art. 14 de la presente ley”.

6) Que bajo tal marco, habrá que determinar si AFIP actuó válidamente al denegar el pedido de información de Tabes SA fundado en las excepciones fijadas por la ley 27.275 —como lo resolvió la a quo— o si, por el contrario, su actuar fue ilegítimo.

6.1) De las constancias de la causa surge que, en el marco de las ordenes de intervención N° 20670420 y N° 2067044, en fecha 03/08/2022 se notificó a la actora los formularios F. 8000/1 Nros. 0150002022048701407 y 0150002022048700707, haciéndole conocer que AFIP dispuso —en ejercicio de las facultades conferidas por el art. 35 de la ley 11.683 y decretos 618/1997 y 507/1993— fiscalizar el cumplimiento del impuesto al “Tabacos” de los períodos del 3/2018 al 07/2019 y 08/2019 al 07/2021, así como los formularios F. 8006/1 0150002022048755804 y 0150002022048756504 intimándola a aportar los papeles de trabajo en los que se identifique cada uno de los productos vendidos y utilizados para la confección de las declaraciones juradas del impuesto interno a la manufactura de cigarrillos ley 23.562.

Posteriormente, el 21/09/2022 se notificó a la empresa los formularios F. 8000/1 Nros. 0150002022058507907 y 0150002022059529707 y F. 8006/1 Nros. 0150002022059620304 y 0150002022059621104 que reemplazaban y anulaban los formularios anteriores notificados el

03/08/2022, en razón de que por un error sistemático en el cuadro con detalles de impuesto se consignó “Tabacos” cuando lo que se fiscaliza es el “impuesto internos - tabaco”, por lo cual se inició un nuevo procedimiento solicitando se ponga a disposición la totalidad de los libros de comercio rubricados, de movimiento de tabaco y de instrumentos fiscales y se aporten los papeles de trabajo correspondientes a la conformación y cálculo de impuestos internos. Al mismo tiempo, se libraron las actas de inspección correspondientes mediante formularios F.8400/L N° 0150002022059517902 y F. 800/L 01500020220595521402.

Luego, mediante notas del 22/12/2022, los apoderados de Tabes SA rechazaron los requerimientos, señalando que mediante resolución del 30/03/2022, en el Expte. 18.153/18, esta Cámara ordenó a la AFIP suspender cualquier acción tendiente al cobro del monto fijo mínimo de tributación establecido en la primera y segunda oración del párrafo segundo del art. 18 de la ley 24.674 (modificado por ley 27.430), lo que incluye las acciones que el organismo está llevando en contra de la firma a través de las órdenes de intervención abiertas y los requerimientos. Añadieron que no corresponde ni hay deber a cargo de Tabes de cumplir los mismos por constituir un acto de evidente violación a dicha orden judicial. Además, solicitaron en los términos de la ley 27.275 que el organismo informe y acompañe las constancias documentales de las causas que motivaron la apertura de las órdenes de intervención y los requerimientos, la instrucción que derivó en fiscalización abierta, con todos los antecedentes incluyendo a los que se dejaron sin efecto ab initio, así como cualquier mensaje interno, directiva, estudio, informe, oficio, correspondencia oficial, acta y cualquier información escrita, fotográfica o grabada en cualquier soporte asociada a la fiscalización.

En fecha 13/01/2023 los apoderados de Tabes efectuaron presentaciones ante AFIP refiriendo nuevamente a la medida cautelar dispuesta por esta Sala, comunicando que su mandante daría cumplimiento a los requerimientos de información y documentación y haciéndoles notar que ese organismo no se encuentra facultado para iniciar los procedimientos de determinación de oficio (art. 16 y siguientes de la ley de procedimiento tributario) en relación al monto mínimo de tributación del impuesto interno al tabaco, pues lo contrario importaría la violación a la orden judicial. Solicitaron prórroga de 15 días para cumplir con los requerimientos y reiteraron el pedido de información en los términos de la ley 27.275 sobre toda documentación y datos referidos a los antecedentes de las órdenes de información iniciadas.

Finalmente, por resolución RESOL-2023-4-E-AFIP-AFIP del 20/01/2023, el Subdirector General de la Coordinación Técnico Institucional de AFIP desestimó los pedidos de acceso a la información pública efectuados por los representantes de Tabes SA, con fundamento en que involucra información amparada en la excepción al derecho al acceso a la información pública prevista en el art. 8 inc. g) de la ley 27.275, por cuanto podría divulgar y/u obstaculizar procedimientos y acciones en curso vinculadas a la investigación sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias.

7) Pues bien, de lo expuesto surge, por una parte, que a través del mecanismo previsto en la ley 27.275 Tabes SA pretende obtener información estrictamente vinculada a la investigación que el organismo está desempeñando sobre la empresa. Es decir, intenta intervenir en el procedimiento de fiscalización llevado adelante por AFIP y que se revelen los datos recabados

y notas internas con recomendaciones u opiniones producidas por sus agentes como parte del proceso previo al dictado de un acto administrativo o a la toma de una decisión referida al cumplimiento de las obligaciones fiscales a su cargo.

Ello, con el fin de que se esclarezca si la actitud desplegada por el Fisco es contraria a la medida cautelar ordenada en el expediente CAF N° 18.143/2018 caratulado “Tabes SA c. EN M HACIENDA-AFIP-DGI s/ acción meramente declarativa de inconstitucionalidad”, de lo que se sigue la evidente relación entre ambos procesos.

7.1) En ese escenario, el 11/09/2024 este Tribunal, en aquella causa (incidente N° 7), dejó sentado que la medida cautelar allí dictada (el 03/04/2022) no enervó las facultades de verificación y fiscalización de AFIP sino que la limitación al organismo estuvo dirigida únicamente a perseguir el cobro por vía judicial del impuesto interno al tabaco, por lo que no puede atribuirse un obrar ilegítimo o arbitrario a la accionada sino, por el contrario, acorde a sus facultades de fiscalización otorgadas por la ley 11.683.

8) Por otro lado, se advierte que la pretensión de la actora revela un interés personal pues, como lo indicó en su escrito de inicio, por medio de este proceso busca constituir una prueba para hacerla valer en otro juicio en el que intervienen idénticos contendientes.

Así, la intención de la recurrente queda desprovista del elemento que le da sustento a la obligación de la Administración de proveer información vinculada a su gestión. Es decir, el pedido de información queda fuera del alcance de lo que pretende proteger la ley 27.275, que es la publicidad de los actos de gobierno a fin de controlar el desenvolvimiento de la administración, gestión pública y cumplimiento de las funciones encomendadas al gobierno cuando se encuentre comprometido el interés público.

En efecto, lo pretendido por Tabes SA no refiere a una información pública sino a un asunto que le incumbe exclusivamente a ella, sin que impacte en los intereses generales de la sociedad como el libre debate de ideas, la libertad de expresión, el escrutinio de la prensa sobre asuntos críticos de interés general, la rendición de cuentas, participación social en la toma de decisiones sobre políticas de Estado, el control democrático sobre actos estatales, de gestión de fondos públicos y eficiencia en el uso de los recursos, transparencia en el cumplimiento de las funciones públicas y cumplimiento de procedimiento legales a fin de erradicar y prevenir la corrupción, entre otros.

Así, no puede otorgársele el carácter de información pública en los términos de la ley 27.275. Más aún, el reciente decreto 780/2024 (BO 02/09/2024) —modificadorio del decreto 206/2017 reglamentario de la mencionada ley— incorporó como artículo 3° al Anexo I de este último y su modificatorio el siguiente texto: “Artículo 3°.- Alcance de las definiciones. (...) b) Documento: La definición de documento establecida en la Ley N° 27.275 y su modificatoria debe entenderse referida a todo registro que haya sido generado, que sea controlado o que sea custodiado en el marco de la actividad estatal.

Las deliberaciones preparatorias y papeles de trabajo, o el examen preliminar de un asunto, no serán considerados documentos de carácter público”.

Aquí debe recordarse que las leyes rigen a partir de su entrada en vigencia (arts. 5 y 6 del Cód. Civ. y Com. de la Nación), y que en el caso de la normativa citada lo es desde el día de

su publicación (art. 8 del Dec. 780/2024). Por ello, en virtud del principio de aplicación inmediata de las leyes, la reglamentación se aplica aún para las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, es decir, para los hechos que están en curso de desarrollo al tiempo de su sanción, situación que se verifica en este caso, pues no se trata de una relación consumada.

9) En ese orden de ideas lo pretendido por la actora sería más bien un pedido de acceso a sus datos personales en los términos de la ley N° 25.326. Sin embargo, en tal marco tampoco podría acceder a lo requerido, pues la norma en su artículo 17, inciso 2, prevé que “la información sobre datos personales también puede ser denegada por los responsables o usuarios de bancos de datos públicos, cuando de tal modo se pudieran obstaculizar actuaciones judiciales o administrativas en curso vinculadas a la investigación sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias o previsionales, el desarrollo de funciones de control de la salud y del medio ambiente, la investigación de delitos penales y la verificación de infracciones administrativas. La resolución que así lo disponga debe ser fundada y notificada al afectado”.

Es que sin dudas la información procesada por la AFIP constituye una excepción al derecho que le asiste a la actora, tal como lo previó el legislador, pues acceder al pedido de la empresa sería otorgarle la posibilidad de obstaculizar la actividad fiscalizadora de la AFIP, por cuanto divulgaría las técnicas o procedimientos de la investigación referida al cumplimiento del impuesto interno, supuesto que constituye un valladar a su pretensión.

En efecto, el derecho de acceso a la información no es un derecho absoluto sino que puede estar sujeto a limitaciones. Por lo tanto, resulta admisible que el ordenamiento jurídico establezca ciertas restricciones al acceso a la información, las que deben ser verdaderamente excepcionales, perseguir objetivos legítimos y ser necesarias para alcanzar la finalidad perseguida.

10) Así las cosas, es correcta la cita efectuada en la sentencia del precedente “Empresa de Combustibles Zona Común SA c. AFIP s/ Habeas Data”, del 07/04/2009 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya que la situación fáctica resulta análoga al presente (ambos versan sobre el pedido de información a la AFIP relacionado con actos inherentes a la determinación y percepción de gravámenes referidos al cumplimiento de obligaciones fiscales del peticionante).

Allí se dijo que “no debe perderse de vista que el alcance de dicha garantía [acceso a la información y posibilidad de controlar su veracidad y uso] encuentra su límite en ciertas circunstancias específicas que no pueden ser soslayadas, tales como el carácter de las funciones que desarrolla el organismo fiscal —ya que no se trata de meros datos o registros obtenidos fuera de un procedimiento legal sino que, tras rigurosos y complejos análisis técnicos, sustentan las conclusiones acerca del cumplimiento de las obligaciones tributarias— y la imposibilidad de que el contribuyente desconozca el fin con el que se recolectan y procesan los datos.

Habida cuenta de ello, la pretensión de la actora no se compadece con el objeto y finalidad del instituto del que intenta valerse [habeas data], pues resulta evidente que el organismo recaudador se encontraba realizando investigaciones tendientes a determinar si había cumplido sus obligaciones tributarias, función en la que subyace un interés público primordial (Fallos:

314:1376; 316:1190; 324:3345) y, por otra parte, la empresa actora, sin mayor fundamento, sólo intenta anticipar la oportunidad en la que debe ejercer su derecho de defensa. Según manda el art. 17 de la ley 11.683, a los efectos de presentar su descargo, el organismo recaudador deberá proporcionar “detallado fundamento” de las impugnaciones y cargos que le formule, y brindar acceso a la totalidad de las actuaciones administrativas que ha labrado toda vez que, como ha sostenido VE, para el cuestionamiento de una determinación impositiva, la ley ha previsto —de manera específica— un procedimiento y un órgano de decisión (arts. 17, 76, 144, 159 y concordantes de la ley 11.683) y la posibilidad de apelar ante los tribunales del poder judicial nacional (Fallos: 310:719, cons. 51, y su cita)”.

A lo dicho se añade que los fallos del Alto Tribunal que el actor invoca en su apoyo no aplica al presente caso, pues “Cippec” versa sobre un pedido de información a la ANSES a fin de que proporcione un listado sobre los beneficiarios de un plan social, o sea que se trata de información sobre terceros. Y el precedente “Álvarez Washington c. AFIP s/ diligencia preliminar” (Fallos: 335:1417) refiere al pedido de documentación a la AFIP relativa a las fiscalizaciones efectuadas sobre el universo de profesionales que prestan servicios jurídicos a fin de determinar si existió una conducta arbitraria o persecutoria en la selección de los contribuyentes investigados, esto es, se trataba de esclarecer si en el marco de la medida preparatoria intentada por el actor el organismo se encontraba compelido a revelar información entregada por terceros y amparada por el secreto fiscal regulado en el art. 101 de la ley 11.683.

11) En síntesis, la actividad del organismo resulta legítima conforme la competencia asignada por la ley 11.683, por lo que su actividad comporta el ejercicio regular de un derecho propio y, por lo tanto, no susceptible de reproche.

Es que, tal como se señaló, la AFIP goza de prerrogativas tendientes a verificar y fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias con el objetivo de que todas las personas contribuyan al sostenimiento de los gastos del Estado, por lo que cuenta con amplios poderes para recolectar, almacenar y proceder al tratamiento de información relacionada con sus potestades fiscales, sin que la actora hubiera demostrado de que los datos recabados puedan ser utilizados para finalidades distintas o incompatibles con aquellas que motivaron su recolección.

En consecuencia, no puede atribuírsele a la accionada un obrar “arbitrario” o “ilegítimo”, razones por las cuales corresponde rechazar el recurso interpuesto.

12) Que en relación al agravio referido a las costas, toda vez que se confirma la sentencia de primera instancia, sin que se adviertan motivos para apartarse del criterio objetivo de la derrota, corresponde mantener su imposición a la actora vencida.

Con idéntico temperamento, las costas de Alzada se imponen a la recurrente (art. 68, 1º párrafo del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación).

Por las consideraciones expuestas, se resuelve: Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la actora el 27/05/2024 y, en consecuencia, confirmar la sentencia del 24/05/2024. Con costas a la vencida (art. 68, 1º párrafo del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación). Regístrese, notifíquese, publíquese en los términos de las Acordadas de la CSJN 15 y 24/2013 y, oportunamente devuélvase. — Mariana I. Catalano.— Alejandro Castellanos. — Guillermo F.

Elías.